



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2010.
FORMA A-34
ACTOR: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA
GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

En México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil trece, se da cuenta al Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 1) los escritos y anexo de Luis Alberto García Alcántar, delegado del Congreso del Estado de Nuevo León, y 2) los escrito de Alejandro López Valdés, delegado del Municipio de San Pedro Garza García, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y registrados con los números de promoción 072808, 000410, 004172 y 007450. Conste.

México Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil trece.

Agréguese al expediente para los efectos legales a que haya lugar, los escritos de los delegados del Congreso del Estado de Nuevo León y del Municipio de San Pedro Garza García, mediante los cuales, el primero informa respecto de los actos emitidos en cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto; y el segundo denuncia el incumplimiento de la misma.

Visto el estado procesal del expediente; con fundamento en el artículo 46, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee respecto del trámite de cumplimiento de la sentencia, de conformidad con los antecedentes siguientes:

Primero. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en este asunto el catorce de junio de dos mil doce, con los puntos resolutive siguientes:

***"PRIMERO.-** Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional. --- **SEGUNDO.-** Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de la impugnación de los artículos 47, fracción VII y 56, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en términos*

del apartado de OPORTUNIDAD de la presente sentencia, así como respecto de los actos consistentes en el sostenimiento de la competencia y la asunción del servicio municipal. --- **TERCERO.-** Se declara fundada la presente controversia constitucional, en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en la falta de emisión del ordenamiento legal a que se refiere el párrafo segundo del artículo 169 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que contenga las bases de integración, funcionamiento y atribuciones de los órganos de lo contencioso administrativo, que diriman las controversias administrativas entre la administración pública municipal y los gobernados, la cual deberá subsanarse mediante la emisión de la regulación correspondiente, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León que inicia en el mes de septiembre de dos mil doce. --- **CUARTO.-** Publíquese esta resolución en el periódico oficial del gobierno del Estado de Nuevo León, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Diario Oficial de la Federación”.

Segundo. En el considerando séptimo se precisaron los efectos del fallo, en los términos siguientes:

“Todo lo anterior significa que la única forma en que puede instaurarse constitucionalmente la administración de justicia en el orden municipal, es mediante la expedición de una ley estatal que contenga, cuando menos, los siguientes elementos: --- a) La creación y determinación de los órganos encargados de impartir la justicia administrativa y su certera composición e integración; --- b) Las garantías y salvaguardas de la independencia de los tribunales y sus titulares; --- c) Los medios de impugnación que serán administrados por esos órganos; --- d) Los plazos y términos correspondientes; --- e) Los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de la sentencia, y --- e) Los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad como rectores de la función jurisdiccional en el orden municipal. --- Es por ello que el Congreso Estatal del Estado de Nuevo León debe establecer las bases en Ley para que los municipios puedan crear estos órganos conforme lo establece la Constitución, los municipios no pueden crear estos órganos por sí mismos sin tomar como punto de partida estas bases, ni el legislador local puede soslayar la obligación constitucional de establecerlas delegándola a los municipios; esto es justamente la naturaleza de la Reserva de Ley: no es solamente una limitación a la facultad reglamentaria de los municipios, sino que configura una obligación positiva a cargo de los legisladores estatales para establecer los contenidos que

N



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

previamente hemos identificado. --- De este modo, este Tribunal determina que el Congreso del Estado de Nuevo León deberá emitir el ordenamiento legal correspondiente a que se refiere el segundo párrafo del artículo 169 de la Ley de Administración Pública Municipal que remite al ordenamiento local que contenga las bases de integración, funcionamiento y atribuciones de los aludidos organismos municipales, en la inteligencia que deberá expedir de una Ley en sentido formal y material, la que deberá emitir a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre y termina el veinte de diciembre de dos mil doce, ello de conformidad con el artículo 50 de la Constitución de la Entidad. [...]

La sentencia dictada en esta controversia constitucional se notificó al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, mediante oficio 3822/2012, entregado el once de octubre de dos mil doce, en el domicilio que designó en autos para tal efecto, según la constancia de notificación que obra a foja ochocientos setenta y seis de autos.

Tercero. Mediante proveído dictado el nueve de noviembre de dos mil doce, con fundamento en los artículos 46 y 48 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requirió al citado órgano legislativo para que informara de los actos que hubiera realizado, tendientes a subsanar la omisión legislativa de que se trata.

En cumplimiento a lo anterior, por escrito recibido en este Alto Tribunal el diecinueve de diciembre de dos mil doce, el delegado de la autoridad demandada, informó con relación al cumplimiento de la sentencia lo siguiente:

"[...] el día 11 de octubre del año en curso, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, turnó el asunto para su cumplimiento, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales [...].

Por otra parte, el 6 de diciembre actual, la Comisión [...] reunida en mesa de trabajo, presentó la iniciativa de proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal [...] dotando a los

Municipios del Estado de Nuevo León, la facultad de crear su propio Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, que dirima las controversias que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados [...].

En sesión del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, el 17 de diciembre actual, el Presidente de la Mesa Directiva, requirió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que diera cumplimiento a las ejecutorias dictadas en las controversias constitucionales números 61/2010 y 88/2010.

En cumplimiento a lo anterior, el 18 de diciembre de 2012, el [...] Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, convocó a reunión de la citada Comisión para llevarse a cabo a las 18:30 horas del mismo día, [...] concerniente a la iniciativa de Ley de Gobierno Municipal (segunda vuelta), resultando que la Comisión se declaró en permanente ante la falta de concesos”.

De igual forma, por diverso escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el diecisiete de enero de dos mil trece, y recibido en este Alto Tribunal el día veintidós de enero siguiente, el delegado del Congreso del Estado de Nuevo León remitió copia certificada del Dictamen que somete a consideración del Pleno de dicha autoridad legislativa el Decreto por el que se adiciona el Título relativo al Procedimiento de Justicia Administrativa Municipal a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y la publicación en el Periódico Oficial estatal que contiene un extracto de las discusiones que se suscitaron respecto del citado dictamen.

Por su parte, el delegado de la parte actora mediante escritos presentados ante este Alto Tribunal el tres de enero de dos mil doce y seis de febrero de dos mil trece, solicita lo siguiente:

“PRIMERO:- *Se me tenga, con el carácter de delegado acreditado por la parte actora: Municipio de San Pedro Garza, García, Nuevo León, en tiempo y forma, denunciando el incumplimiento de la sentencia por la que se declara procedente y fundada la controversia constitucional 61/2010 y ordena expedir el ordenamiento legal a que se refiere el segundo párrafo del artículo 169 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SEGUNDO:- *Teniéndose la elusión en el cumplimiento de la sentencia por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, turnar el asunto al Ministro Ponente para que someta al Pleno del Tribunal Constitucional, el proyecto por el que se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.*

Cuarto. De los antecedentes expuestos, se advierte que la sentencia de catorce de junio de dos mil doce, dictada en este asunto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró fundada la omisión legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en la falta de emisión del ordenamiento legal a que se refiere el párrafo segundo del artículo 169 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que contenga las bases de integración, funcionamiento y atribuciones de los órganos de lo contencioso administrativo, que diriman las controversias administrativas entre la administración pública municipal y los gobernados, la cual debió subsanarse mediante la emisión de la regulación correspondiente, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León que inició en el pasado mes de septiembre de dos mil doce y que concluyó el veintitrés de diciembre de dicho año.

Por tanto, dado que el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León, concluyó el veintitrés de diciembre de dos mil doce, según el Decreto número 50 publicado el veintiocho de diciembre de dicho año, en el Periódico Oficial de la entidad, sin que obre en autos constancia que acredite la emisión, dentro del plazo fijado por el fallo constitucional, del ordenamiento legal a que se refiere el párrafo segundo del artículo 169 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; en consecuencia, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

establece: “[...] Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna actuación sin que ésta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que requiera a la obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratase de eludir su cumplimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”; como lo solicita el delegado del Municipio actor, dado que no se ha logrado el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, **envíese el expediente al Ministro Ponente José Ramón Cossío Díaz**, para que formule el proyecto de resolución que en derecho proceda.

Notifíquese por lista y por oficio al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

Así lo proveyó y firma el **Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con el licenciado Marco Antonio Cepeda Anaya, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

